LA UNIVERSIDAD Y LOS DERECHOS DE BIENESTAR

*Paulette Dieterlen**

Sin duda alguna una de las teorías políticas más discutida en los últimos quince años es la teoría de la justicia de John Rawls. Me parece que una de sus contribuciones más importantes es la de conciliar dos principios que, dentro del pensamiento liberal, parecían irreconciliables: el de la libertad y el de la igualdad.

Con esta afirmación no pretendo decir que todos los pensadores liberales fueran defensores de la libertad a expensas de la igualdad. Un claro ejemplo de reconciliación de dichos principios se encuentra en la obra de J.S. Mill. El utilitarismo de Mill lo llevó a defender la idea, previamente sostenida por Bentham, de que una buena ley era aquella que producía mayor felicidad al mayor número de individuos. Pero por otro lado, él defendió la libertad de los ciudadanos pensando que una buena ley era la que garantizaba los derechos de los individuos, tanto políticos como económicos. Mill no vio que la defensa de un orden económico libre de la intervención del Estado traería como consecuencia que los ricos fueran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres; y que este fenómeno es contrario a la máxima utilitarista.

A Rawls lo anima el mismo interés que animó a Mill, lograr una sociedad igualitaria que garantice los derechos de cada uno de los individuos que la componen, y para ello recoge varias tradiciones. Primero, toma la defensa de los derechos individuales que, según él, aparecen en la cultura occidental con las luchas religiosas que se dieron en

169

*Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM.

Paulette Dieterlen

Inglaterra en el siglo XVII;¹ segundo, para evitar la contradicción del utilitarismo con la defensa de los derechos, recurre a una teoría contractualista heredada de Rousseau; tercero, se basa en la noción kantiana del imperativo categórico para afirmar la universalidad, por la intersubjetividad, de los principios de justicia.

La teoría de Rawls es inmensamente rica en cuanto a temas. Ha dado origen a discusiones en ética, por ejemplo, al sostener una moral constructiva, en filosofía del derecho, al abordar temas como la desobediencia civil, en economía, al defender ciertos criterios de distribución, etc. En este trabajo, por falta de tiempo y de capacidad, me referiré exclusivamente a la defensa que hace de la justicia distributiva.

De acuerdo con Rawls, para formular una teoría de la justicia tenemos que especificar de un modo particular, aunque abstracto, la concepción de la sociedad que subyace en ella. La concepción de la justicia como imparcialidad hace explícitos los rasgos generales que tiene que reunir toda sociedad en la que, tras la debida reflexión, nos gustaría vivir y nos gustaría que moldeara nuestros intereses y nuestro carácter. La noción de sociedad bien ordenada es el resultado de esta reflexión.

170 Ante todo, afirma Rawls, una sociedad bien ordenada se define como efectivamente regulada por una concepción de la justicia; esto es, una sociedad en la que:

1. Todo el mundo acepta, y sabe que los otros aceptan los mismos principios (la misma concepción) de justicia.

2. Las instituciones sociales básicas y su articulación en un esquema satisfacen esos principios; y con razón todo el mundo cree que los satisfacen.

3. La concepción pública de la justicia se funda en creencias razonables, establecidas por métodos de investigación generalmente aceptados.

En segundo lugar, se da por supuesto que los miembros de una sociedad bien ordenada son y se ven a sí mismos como personas morales libres e iguales. Expresado de forma más específica pueden ser descritos como sigue:

¹ Cfr. Rawls, John, "Justice as fairness: political, not metaphysical", en *Philosophy and Public Affairs*, 14, 1985.

UNIVERSIDAD Y DERECHOS

4. Cada uno de ellos tiene, y se ve a sí mismo como teniendo un sentido de la justicia que normalmente es efectivo, esto es, que el deseo de actuar con arreglo a esa concepción determina, en su mayor parte, su conducta.

5. Cada uno de ellos tiene, y se ve a sí mismo, como teniendo, metas e intereses fundamentales (una concepción de su bien), en nombre de los cuales es legítimo que presenten unos frente a otros pretensiones en el diseño de sus instituciones.

6. Cada uno de ellos tiene, y se ve a sí mismo como teniendo, un derecho de igual respeto y consideración a la hora de determinar los principios por los cuales ha de regularse la estructura básica de su sociedad.

7. Las instituciones sociales básicas generan un sentido de la justicia efectivo, que les presta apoyo.

Uno de los problemas de la sociedad bien ordenada, tal como la concibe Rawls, es que a pesar de que suponemos que los recursos naturales y el estado de la tecnología son tales que la cooperación social es al mismo tiempo posible y necesaria, los beneficios que arrojan quedan por debajo de las demandas que la gente plantea. Por consiguiente:

8. Existen condiciones de escasez moderada. Pero también se supone que las personas y los grupos tienen concepciones del bien que les inclinan en direcciones contrarias, y que plantean pretensiones y contra-pretensiones unos frente a otros. Tienen además creencias básicas (religiosas, filosóficas, y morales) opuestas, y formas diferentes de evaluar pruebas y argumentos en muchos casos esenciales, y por ello:

9. Hay una divergencia en los intereses y fines fundamentales, una diversidad de creencias básicas opuestas e incompatibles. Rawls da por supuesto que los arreglos son productivos; no son, por así decirlo, juegos de suma cero en el que la ganancia de una persona o de un grupo es la pérdida de la otra persona o del otro grupo. Por ello:

10. El esquema de instituciones básicas es más o menos autosuficiente y productivo de cooperación social para el bien mutuo.

Según Rawls los miembros de una sociedad bien ordenada no son indiferentes respecto al modo como se distribuyen los mayores beneficios producidos por su cooperación, por ello se requiere de un conjunto de principios para decidir entre los arreglos sociales que determinan ese reparto de ventajas. Esto se expresa de la siguiente forma:

Paulette Dieterlen

11. El papel de los principios de justicia es asignar derechos y deberes en la estructura básica de la sociedad y especificar el modo apropiado cómo las instituciones pueden influir en la distribución global de los beneficios y las cargas.

Finalmente Rawls añade:

12. Los miembros de una sociedad bien ordenada consideran la estructura básica de la sociedad como el objeto primario de la justicia (como aquello a lo que los principios de justicia han de aplicarse en primer término).²

Después de haber descrito lo que, según Rawls, son las características de una sociedad bien ordenada me parece importante referirme a dos puntos básicos de su teoría, los principios de la justicia y la noción de bienes primarios, ya que es dentro de estos temas que, a mi parecer, se inscribe una discusión acerca de la Universidad.

Los principios de la justicia son los siguientes: primero, toda persona que toma parte en una institución o se ve afectada por ella tiene un derecho igual a la más amplia libertad compatible con una similar libertad para todos; y segundo, las desigualdades sociales y económicas han de satisfacer dos condiciones: tienen que a) ser para el beneficio máximo esperado del menos favorecido; y b) ir adscritas a cargos y posiciones accesibles a todos en condiciones de equitativa igualdad de oportunidades.³

172

Según Rawls, el primero de estos principios tiene prioridad sobre el segundo; y la medida del beneficio del menos favorecido lo es en términos de un índice de bienes sociales primarios. Estos bienes primarios son los derechos, las libertades y oportunidades, la renta y la riqueza, y las bases sociales del respeto a sí mismo; los bienes sociales primarios son cosas que se presume que los individuos desean, sea cual fuera lo que además de ellos deseen, y cualesquiera que fueran sus fines últimos.

Estos dos principios dependen de la concepción que se tiene de las personas que, según Rawls, son consideradas como poseedoras de metas e intereses fundamentales, cuyas pretensiones se tienen que proteger en la medida de lo posible.

Un rasgo importante de los dos principios es que valoran la estructura básica de la sociedad en términos de los bienes primarios —y la medida

² Rawls, John, *Justicia como equidad*, 1986, Madrid, Tecnos.

³ *Ibid.*, p. 107.

UNIVERSIDAD Y DERECHOS

de los beneficios es un índice de dichos bienes. Éstos tienen dos propiedades: 1) son características objetivas de las instituciones sociales y de la situación de las personas con respecto a ellas; 2) el mismo índice de esos bienes se emplea para comparar las circunstancias sociales de todos.

Ahora bien, Rawls caracteriza los bienes primarios bajo los siguientes rubros:

a. Primero, las libertades básicas, por ejemplo: la libertad de pensamiento y de conciencia; la libertad de asociación; la libertad e integridad de la persona, así como el imperio de la ley; y finalmente las libertades políticas.

b. Segundo, la libertad de movimiento y de elección, de ocupación sobre un trasfondo de oportunidades diversas.

c. Tercero, poderes y prerrogativas de cargos y posiciones de responsabilidad, particularmente de las principales instituciones políticas y económicas.

d. Cuarto, renta y riqueza; y

e. Finalmente, las bases sociales del respeto a sí mismo.⁴

La tesis que sostendré es que, si estamos de acuerdo con Rawls en que la justicia de alguna manera es la virtud que combate las desigualdades, la única institución educativa que cumple con los requisitos que nos exigen tanto los principios de justicia como la distribución de los bienes primarios es la universidad pública.

Definiré en términos muy generales la universidad pública, como aquélla que garantiza la libertad de cátedra y que por contar con un subsidio estatal cobra colegiaturas que pueden ser pagadas por un gran porcentaje de la población.

Si bien cualquier institución educativa tendría que respetar el primer principio de la justicia, es decir el que garantiza el derecho por igual al más amplio esquema de libertades básicas compatible con un esquema similar de libertades para todos, obviamente si se encuentra en una sociedad democrática creo que únicamente las instituciones educativas públicas cumplen con el segundo principio, el de dar mayor beneficio a los miembros menos favorecidos de la sociedad y ofrecer posiciones accesibles a todos en condiciones de equitativa igualdad de oportunidades.

173

⁴ *Ibid.*, p. 190.

Paulette Dieterlen

Me parece que es necesario defender la importancia de que la universidad tenga, entre una de sus funciones, la de garantizar el cumplimiento de los principios de justicia. Actualmente han cobrado mucha importancia las teorías políticas y económicas llamadas "libertarias", que defienden la privatización de instituciones que hasta ahora había garantizado algunos de los derechos llamados de bienestar, entrando en esta rúbrica los servicios médicos y los educativos.⁵

A continuación me referiré a algunos de los argumentos que esgrimen los teóricos "libertarios" y utilizaré como ejemplo el caso de la universidad pública.

El primer argumento es de carácter económico. El libertarismo proclama la eficacia del mercado como la forma más eficiente de asignar recursos y oportunidades a los miembros de la sociedad. De esta manera, si las universidades están sujetas a la ley de la oferta y la demanda, mejoraría considerablemente la calidad de la mercancía académica. Si los alumnos pagan colegiaturas altas los profesores estarían mejor pagados y tendrían más recursos para continuar su preparación. Esto sería eminente porque sus puestos también dependerían de la oferta y la demanda y los que no cumplieran quedarían fuera del juego del mercado. Por su parte la universidad pública, al no estar sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, provoca una ineficiencia que redunde en contra de los profesores y los alumnos. De los primeros, porque no tienen ningún aliciente económico que los haga superarse, de los segundos porque, por un lado, reciben una educación ineficiente, y por otro se acostumbran a recibir sin tener que dar. Otra ventaja que ofrece el mercado a las instituciones de educación superior, es que el mismo mecanismo designa las profesiones que son demandadas, es decir las que el país requiere.

El segundo argumento, también de carácter económico, consiste en afirmar que la universidad privada es la única institución de educación superior que no es una carga para el Estado. Esta clase de instituciones dependen económicamente de las colegiaturas que pagan los alumnos y de patronatos que "voluntariamente" contribuyen a su mantenimiento. La palabra "voluntariamente" es importante por razones que veremos más adelante. Por el contrario, la universidad pública resulta un gasto

⁵ Nozick, Robert, *Anarchy, State and Utopia*, 1974, Oxford, Blackwell.

UNIVERSIDAD Y DERECHOS

innecesario para el Estado, sobre todo si éste se encuentra frente a una situación de escasez no tan moderada.

Otro argumento es de carácter político. Un Estado que da recursos a la Universidad es un Estado paternalista, es decir, un Estado que toma decisiones sobre ciertos recursos económicos, independientemente de lo que decida la mayoría de los ciudadanos.

El último argumento al que me referiré es, supuestamente, moral. Los hombres tienen derechos que ningún Estado ni alguno de los otros ciudadanos pueden violar. El imponer a unas personas una carga fiscal excesiva para contribuir con ciertas instituciones de las cuales probablemente nunca obtendrán ningún beneficio, es violar uno de sus derechos fundamentales, el derecho de elegir voluntariamente, en qué gastan el dinero que con tanto esfuerzo han ganado. El término "voluntario" es básico para el libertarismo, ya que por ello entiende cualquier decisión que tomen los individuos aun cuando las alternativas de acción que se les presenten sean dos. Un ejemplo célebre del carácter voluntario de las acciones lo da Robert Nozick al intentar demostrar la falacia de la tesis, propia del socialismo, de la explotación de los trabajadores por la venta de la fuerza de trabajo, ya que según él en un régimen de mercado éstos tienen la opción de trabajar para un empresario o de morir de hambre.⁶ Así, cualquier miembro de la sociedad puede elegir "voluntariamente" entre gastar sus recursos para que alguien de su familia tenga acceso a la educación superior, independientemente de los sacrificios que esto implique, o de gastarlos en otra cosa, por ejemplo en alimentos y ropa. Por otra parte, los miembros de la sociedad que tienen un nivel económico alto no tienen la obligación de gastar su dinero en impuestos destinados a la salud o a la educación pública; ese dinero pueden aprovecharlo para ir a Europa, tener un departamento en algún lugar de Estados Unidos, viajar en cruceros, etc. Por esta razón, sólo un sistema de educación privada no viola los derechos de las personas.

175

Comencé este trabajo con una exposición de Rawls porque creo que sus intuiciones básicas son las que nos permiten atacar las doctrinas libertarias y defender a la universidad pública. Veamos porqué.

El primer argumento del libertarismo, visto anteriormente, descansaba en la idea de la eficiencia del mercado para asignar recursos y

⁶ *Ibid.*, p. 263.

Paulette Dieterlen

oportunidades a los miembros de la sociedad. Esta virtud de dicho mecanismo económico prácticamente no es negada por nadie, sin embargo la posición de Rawls al respecto es que los individuos entran al juego mercantil con diferentes bienes que ofrecer, tanto en propiedades como en habilidades. De esta manera los que por su posición económica tengan menos, no se verán favorecidos por la oferta y la demanda; por esta razón Rawls exige que las desigualdades sean permitidas si van en favor de los miembros menos privilegiados de la sociedad. El mercado debe ser limitado por un sistema que redistribuya los bienes primarios de la sociedad. Rawls es muy claro al afirmar que el criterio de eficiencia no es suficiente para el diseño de una sociedad bien ordenada, es necesario además, un criterio de justicia. La universidad privada aumenta la distancia que existe entre los diferentes grupos de la sociedad, lo que trae como consecuencia que se viole el segundo principio de la justicia. Por el contrario, la universidad pública puede verse como uno de los bienes primarios, ya que favorece la elección de ocupación sobre un trasfondo de oportunidades diversas.

176

El segundo argumento económico, el de la carga que representa para el Estado la universidad pública, me parece que no se sostiene si se logra una planificación adecuada de los gastos del Estado, así como de los gastos de la propia universidad. Quizá el argumento libertario podría defenderse si nuestras expectativas son a corto plazo, pero no se puede mantener si lo son a largo plazo. Me parece que es posible afirmar que cuantas más personas tengan acceso a la universidad, más recursos tendrá el Estado para llevar a cabo un desarrollo económico y social.

Al argumento de la asignación de profesiones por la ley de la oferta y la demanda lo encuentro tan peligroso como falaz. Peligroso porque parece que ha tenido un cierto éxito en las sociedades contemporáneas, falaz porque con frecuencia se olvida que aquellas disciplinas que no son "rentables" y que por lo tanto no cuentan con mucha demanda, como las humanidades, son las que han fraguado la cultura de los países.

Me parece que el gran error de las teorías libertarias ha sido juzgar a todas las instituciones como si fueran empresas; y la producción académica no puede ser tratada como si fuera una producción industrial.

El argumento político acerca del Estado paternalista, puede ser criticado si hacemos una distinción entre lo que es un sistema de distribución justo y uno paternalista. Podemos decir que mientras el segundo impone

UNIVERSIDAD Y DERECHOS

preferencias a los sujetos, el primero ofrece varias alternativas para que los individuos elijan lo que prefieren. La educación pública aumenta las posibilidades de elección que tienen las personas. Creo que la libertad personal está íntimamente relacionada con la cantidad de alternativas que se tengan para elegir.⁷

Por último, el argumento moral puede ser atacado si pensamos que los libertarios sólo defienden los derechos llamados “negativos”, es decir, los derechos que tienen las personas a que nadie interfiera con sus planes de vida. Autores como Rawls también defienden los derechos llamados “positivos”, es decir, los derechos que los hombres tienen a que ciertas instituciones les garanticen la satisfacción de las necesidades básicas, como la salud y la educación. La defensa de los derechos positivos está basada en la creencia de que, por ejemplo, la libertad de expresión debe estar acompañada por la posibilidad de saber expresarse. En este sentido la universidad pública hace posible que un mayor número de personas tenga acceso al derecho positivo correspondiente.

Si los libertarios quieren atacar a la universidad pública, tienen que atacar con argumentos la existencia de los derechos positivos, también llamados derechos de bienestar.

En resumen, lo que quiero afirmar es que la universidad pública cumple con los requisitos de la teoría de la justicia de Rawls por las siguientes razones.

1) Favorece el cumplimiento del primer principio de la justicia, es decir, el de la libertad de pensamiento. 2) Se adecúa al segundo principio de la justicia, que se refiere a la aceptación de las desigualdades siempre y cuando éstas benefician a los miembros menos favorecidos de la sociedad y al incremento de la igualdad de oportunidades. 3) Se encuentra dentro del esquema de los bienes primarios, ya que permite la elección de ocupación sobre un trasfondo de oportunidades diversas.

Me parece que aceptar estos puntos es aceptar que una de las virtudes que deben perseguir nuestras instituciones públicas es la justicia, y que una meta a la que deben aspirar es la disminución de desigualdades.

⁷ Para ver algunos de los problemas relacionados con la confusión entre las políticas paternalistas y las políticas de justicia distributiva ver: Paulette Dieterlen, “Paternalismo y Estado de Bienestar”, en *Doxa* No. 5, Alicante, España.

Paulette Dieterlen

Sé que el problema es complejo, sobre todo si nos encontramos en una situación económica crítica. No me he referido a la conexión entre la universidad pública y la universidad gratuita porque considero que es un problema que rebasa los límites de mi trabajo. Lo que no quiero dejar de afirmar es que la universidad debe estar al servicio de las personas, que por sus circunstancias económicas, se encuentran en una situación de desventaja. Es más, creo que si aceptamos que el mercado es un mecanismo eficaz de asignación de recursos, el acceso de un gran número de personas a la universidad lo hace más plausible porque de alguna manera limita las desigualdades iniciales.

Actualmente se habla mucho de la crisis de las universidades públicas, se acentúan sus defectos y se minimizan sus ventajas. No puedo afirmar que todo en ellas es perfecto, hay muchas cosas que corregir. Sin embargo creo que la lectura de un autor como Rawls debe llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de plantearnos como meta, si no una sociedad igualitaria, sí una menos desigual, es decir, menos injusta, y no creo que esto sea posible si no defendemos con argumentos y hechos a la universidad pública. Su defensa es la defensa de una sociedad, en términos de Rawls, bien ordenada.